

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Valdivia
CAUSA ROL : C-2254-2019
CARATULADO : HURTADO/FISCO CDE

Valdivia, treinta y uno de Enero de dos mil veintidós

Vistos:

A folio 1 Carlos Hurtado Gallardo, profesor, run n.º 5.761.709-8; domiciliados en Av. O'Higgins n.º 380, oficina 51, Edificio Cervantes, Valdivia, dedujo demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, representado por Natalio Vodanovic Schnacke, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en calle independencia n.º 630, oficina 31, Valdivia, pretendiendo el pago de \$250.000.000 con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago de la suma señalada o de la que en definitiva el tribunal determine, con costas.

Fundó su pretensión en que fue detenido el día 18 de septiembre de 1973 por carabineros de la Tercera Comisaría de Rahue, por lo que su padre se apersonó a dicha comisaría preguntando los motivos de tal detención. La respuesta del funcionario de Carabineros fue “ponga todas sus cosas en su pañuelo y póngase al lado de su hijo”; ante esto su hermano se da cuenta de los hechos y se acerca a la Comisaría preguntando por qué los detenían y la respuesta fue la misma. Así, los 3 estuvieron detenidos durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 1973 en un calabozo con otras 22 personas. El día 21 en la mañana fueron dejados en libertad, pero dos o tres días después fue detenido nuevamente y otra vez llevado a la Tercera Comisaría, donde sufrió tortura física y psicológica. En mal estado fue trasladado al Estadio Español, donde estuvo aproximadamente dos semanas y de allí lo llevaron al Hospital nuevo donde operaba la Fiscalía militar.

En cinco oportunidades, con los ojos vendados, lo acostaron en una especie de camilla para ponerle corriente eléctrica en los testículos y en la sien izquierda por debajo de la venda; en otras oportunidades un cable era puesto en la lengua aumentado así la tortura y, como no podía dar respuesta a las preguntas que le formulaban, lo enviaron incomunicado durante cinco días a la Cárcel de Osorno, tratos que se repitieron durante su detención entre octubre y diciembre de 1973. Agregó que no recuerda la fecha pero debió presentarse en el Regimiento



Arauco donde se realizaría el Consejo de Guerra, causa n.º 1640—1973, y después de los alegatos que en su defensa hizo un abogado fue absuelto por que la causa no tenía los méritos suficientes. Posteriormente el Juez militar de Valdivia le ordenó firmar todos los viernes, durante un año. El tiempo de su detención fue de 1 año y 20 días y luego pasó otro año firmando todos los viernes.

Finalizó indicando que producto de la detención y malos tratos sufridos quedó con secuelas múltiples, tales como crisis de pánico y trauma psíquico en general y que consta en el informe elaborado por la comisión Valech 1, que dicho organismo tuvo conocimiento de los hechos descritos reconociéndole la condición de víctima por razones políticas y de tortura, signándolo bajo el número 11.751, en la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura.

A folio 12 se contestó la demanda oponiéndose excepción de reparación, alegándose la improcedencia de la indemnización pretendida por el actor por haber sido ya indemnizado en conformidad a la ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas que han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación; a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca la reparación moral y patrimonial de las víctimas. Así, la acción interpuesta está basada en los mismos hechos y pretende indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad.

En subsidio dedujo excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes. En subsidio, para el evento que se estimare que esta norma no es aplicable al caso de autos, opuso excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos, en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la presente demanda, ha transcurrido con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Luego, para el evento improbable que se estime que la acción deducida en autos es imprescriptible, y compatible en su caso con la indemnización obtenida por los actores, hizo presente que cada uno de los perjuicios alegados debe ser



acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de cada indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, sostuvo que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Finalmente hizo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y, además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A folios 16 y 18 se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, respectivamente, oportunidad en que las partes profundizaron los argumentos expuestos en los libelos de demanda y contestación.

A folio 22 se recibió la causa a prueba y a folio 49 se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

I) En cuanto a excepción de pago

Primero: Que, la excepción de pago se funda en que el actor ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de una pensión de reparación conforme a la ley 19.123, argumentación que como se ha sostenido por los tribunales superiores contradice la normativa internacional de los Derechos Humanos ya que el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.

Por otro lado, la normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no se puede suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado.

Así, ello no supone una renuncia de las partes o una prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

Igualmente la jurisprudencia sobre este punto es uniforme.

II) En cuanto a excepción de prescripción

Segundo: que, como igualmente ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol n.º 13.699-15), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de



los perjuicios ocasionados encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en su establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos, normas que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno.

Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

Lo anterior constituye un lugar común de la jurisprudencia sobre la materia de modo que innecesario se vuelve mayor análisis sobre el punto.

III) En cuanto al fondo

Tercero: que la calidad de víctima de violencia por parte de organismos y funcionarios estatales surge de la documental de folio 1 consistente en nómina de la Comisión Valech donde bajo el nro. 11.751 se le reconoce como tal, sumado a las declaraciones de los testigos Vidal Yáñez y Oyarzun Rathgeb a folio 46 quienes dan cuenta de la detención de que fue objeto el actor en 1973 por parte de agentes del estado, por razones políticas y sufriendo tratos vejatorios.

Refrenda igualmente lo anterior el hecho de ser el actor titular de los beneficios que instituyó la ley n.º 20.874 conforme se acredita con el oficio de folio 23.

Cuarto: que, en orden a acreditar la existencia de daño como consecuencia de lo anterior se acompañó a folio 32 informe psicológico de daño emanado del Servicio de Salud Valdivia que da cuenta de padecer el actor efectos y trastornos propios de un síndrome de tortura, los cuales permanecen en forma crónica en su vida, aspectos que también son referidos por los testigos de folio 46.

Tal informe da cuenta de daño propiamente tal en el actor ya que concluye que tal sintomatología no ha tenido reparación en la medida que no ha habido reconocimiento de su situación ni se han adoptado medidas de reparación adecuadas.

Quinto: que en orden a cuantificar el daño y regular el monto de la indemnización cabe consignar que si bien precedentemente se rechazó la excepción de pago opuesta por el Fisco, no es menos cierto que el demandante había percibido a septiembre de 2019 beneficios por monto superior a los 81



millones de pesos, en lo que se comprende una pensión mensual de \$416.083 – ver documental de folio 23-, beneficios que se originan a partir del mismo hecho dañoso que motiva la acción indemnizatoria de marras.

Por lo anterior, a la luz de los antecedentes referidos, dados los hechos que sufrió el actor y considerando las sumas que reiteradamente ha establecido la Corte de Valdivia para casos similares y a efectos de establecer uniformidad para casos de esta naturaleza, se estima prudente regular la indemnización pretendida por el actor en la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos).

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 160, 170, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 303, 1698, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: que no ha lugar a las excepciones de pago y prescripción opuestas por Fisco de Chile; y que ha lugar la demanda de folio 1 solo en cuanto se condena al Fisco de Chile al pago de la indemnización referida en el considerando quinto de esta sentencia, más reajustes e intereses desde que quede ejecutoriada, sin costas.

Consúltese si no se apelar.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Rol 2254-2019.

Dictó don Rafael Cáceres Santibáñez, juez subrogante.

En Valdivia, a treinta y uno de Enero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

